

ACUSADO: JORGE ANTONIO MUÑOZ MIRANDA

RUC : 2200746927-K

RIT : 362-2023

DELITO : RECEPCIÓN DE VEHICULO MOTORIZADO, CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO CON PLACA PATENTE FALSA, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO CON PERMISO DE CIRCULACIÓN, SEGURO OBLIGATORIO Y CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICAS FALSOS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y PORTE ILEGAL DE MUNICIONES

Santiago, miércoles diez de enero de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Tribunal e intervinientes.* Que, con fecha cuatro y cinco de enero de dos mil veintitrés, ante esta Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los magistrados don Pedro Aravena Bouyer, quien presidió la audiencia, don Cristian Fuentealba Zamora y Claudia Morgado Moscoso, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral **RIT N°362-2023**, seguida en contra de **JORGE ANTONIO MUÑOZ MIRANDA**, Cédula de Identidad N° 15.357.210-0, divorciado, nacido en Santiago el 24 de marzo de 1983, 40 años, comerciante ambulante, domiciliado en calle Camino de Loyola N° 5264, departamento N° 534, Edificio Alerce, comuna de Lo Prado.

Sostuvieron la acusación del presente juicio, el Fiscal del Ministerio Público, señor Gonzalo Álvarez Barrientos, mientras que la defensa del acusado estuvo a cargo del Defensor Penal Privado señor Hans Graver Del Valle, todos los profesionales con domicilio y forma de notificación registrada en el tribunal.

SEGUNDO: *Acusación fiscal.* Que según da cuenta el auto de apertura de fecha 23 de agosto de 2023 la acusación es del siguiente tenor:

HECHOS DE LA ACUSACIÓN

El día 02 de Agosto de 2022, a las 10:35 horas aproximadamente, en calle Padre Jaime Larraín Hurtado al llegar a calle Pío XII, en la comuna de Estación Central, el imputado JORGE ANTONIO MUÑOZ MIRANDA, fue sorprendido conduciendo el vehículo marca Nissan, modelo Qashqai, año 2018, color rojo magnético, el cual portaba la Placa Patente Única LLHG-31, a sabiendas que esta era falsa, lo que se determinó a su control, ya que no poseía sellos holográficos ni signos estampados o impresos, la perfilación del escudo nacional era imprecisa, además de anomalías tipográficas en los caracteres de identificación. Asimismo, a la revisión de la documentación del vehículo asociado a la placa patente única LLHG-31, correspondiente a permiso de circulación de la Ilustre Municipalidad de Macul, certificado de inscripción, certificado de revisión técnica y seguro obligatorio, se logró determinar que eran falsas, toda vez que sus códigos QR no arrojaron coincidencia alguna, estableciéndose de esta manera que no habían sido otorgados, corroborándose además por el Departamento de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Macul que la Placa Patente Única LLHG-3, no registra pago de permiso de circulación en esa Ilustre Municipalidad. A la revisión de los números de motor y chasis del vehículo, se pudo determinar que su verdadera Placa Patente Única era la KTTC-33, presentando encargo vigente por Robo en Bienes Nacionales de Uso Público N° SEBV_202207_3792, de fecha 15 de Julio de 2022, según denuncia N° 3175, de la 44 Comisaría de Lo Prado, interpuesta por su dueña, la víctima JENNIFFER ELIZABETH SEPÚLVEDA PALMA. Al registro del interior del vehículo, bajo el asiento del copiloto el imputado JORGE ANTONIO MUÑOZ MIRANDA escondía una mochila en la que en la que guardaba 400.000 mil pesos en dinero en efectivo y en ella también portaba una pistola a fogueo marca Bruni, modelo 93, calibre 9 mm. Knall, sin número de serie, la que se encuentra modificada en su cañón el cual fue horadado, no encontrándose obturado, además sus mecanismos internos y externos se encuentran funcionando de manera sincronizada según su diseño de fabricación y propósito, su alimentación es

mediante un cargador tipo cajetilla doble columna, con capacidad para contener en su interior 11 cartuchos, encontrándose por tanto apta para ser utilizada como arma de fuego convencional. El cargador del arma contenía 04 cartuchos de fogeo de 9 mm. Knal, de diferentes marcas, los cuales presentan sus cápsulas iniciadoras indemnes, manteniendo una modificación en su estructura original de fábrica al presentar un trozo de metal de color gris a modo de proyectil, encontrándose aptos para ser utilizados como munición convencional por armas de fogeo modificadas de igual diámetro, siendo compatible en uso con la pistola también encontrada, sin que el imputado mantuviera autorización para el porte o tenencia de armas de fuego.

CALIFICACIÓN JURÍDICA: A juicio de la Fiscalía los hechos son constitutivos de los delitos de RECEPCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A inciso 3º del Código Penal, el delito de CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO CON PLACA PATENTE FALSA, previsto y sancionado en el artículo 192 letra e) de la Ley N° 18.290 del Tránsito; el delito de CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO CON PERMISO DE CIRCULACIÓN, SEGURO OBLIGATORIO Y CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA FALSOS, previsto y sancionado en el artículo 192 inciso final de la Ley N° 18.290 del Tránsito; el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el artículo 14 en relación con el artículo 3 letra e) de la ley 17.798 de Control de Armas y, el delito de PORTE ILEGAL DE MUNICIONES, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación con el artículo 2 letra c) de la ley 17.798 de Control de Armas.

PARTICIPACIÓN: Se le atribuye participación en calidad de autor, conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal.

MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD: A juicio del Ministerio Público no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

PENA REQUERIDA: Solicita el Ministerio Público se impongan al acusado las siguientes penas:

1) 5 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, MULTA DE 20 UTM, accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más las costas de la causa por el delito consumado de RECEPCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO.

2) 3 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, SUSPENSIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR O INHABILITACIÓN PARA OBTENERLA POR IGUAL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE 50 UTM, accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más las costas de la causa por el delito consumado de CONDUCCION DE VEHICULO CON PLACA PATENTE FALSA.

3) 3 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, SUSPENSIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR O INHABILITACIÓN PARA OBTENERLA POR IGUAL TIEMPO DE LA CONDENA, MULTA DE 50 UTM, accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más las costas de la causa por el delito consumado de CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO CON PERMISO DE CIRCULACIÓN, SEGURO OBLIGATORIO Y CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA FALSOS.

4) 5 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más las costas de la causa por el delito consumado de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.

5) 3 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más las costas de la causa por el delito consumado de PORTE ILEGAL DE MUNICIONES.

TERCERO: *Alegatos de apertura.* Que, en los alegatos de apertura el **Ministerio Público** señaló que se trata tanto de delitos vinculados entre sí como otros independientes, los que se acreditarán, junto con la participación, con la declaración del funcionario fiscalizador y sus circunstancias, además de prueba pericial relativa al arma de fuego y a los documentos que portaba, los que eran falsos, todo ello apoyado de imágenes.

Por su parte, la **Defensa** plantea una tesis absolutoria, y será el propio acusado el que explicará cómo adquirió el vehículo, sin saber los antecedentes irregulares que le imputa el persecutor, destacando que era el móvil el que tenía dentro un bolso con las armas dentro, lo cual ignoraba.

CUARTO: *Declaración del acusado.* Que, debidamente advertido de su derecho a guardar silencio, el acusado decidió renunciar a éste y prestar declaración en los siguientes términos:

Era un día 2 de agosto que yo andaba buscando una camioneta para comprar y me ofrecieron en la villa Portales una en prenda y ese día me junté con la persona y tenía que ir a una ecografía de alto riesgo de mi señora y me la vendían en cuatro millones, pero al final quedó en \$3.600.000 y yo tenía que hacer la documentación de lo que no tengo mucho conocimiento de un vehículo en prenda, pero busqué un vehículo en prenda que es más barato y como tenía que ir a hacer la ecografía de mi señora le pregunté al señor si podía hacer la documental mañana y me dijo que sí y entonces me fui, recorrí varias calles, Portales, Matucana, Alameda, Hermanos Arellano, cruzo General Velásquez y Cinco de Abril y fue cuando me tercié con una camioneta de la Policía de Investigaciones y como iba apurado por Cinco de abril doblo por calle Luis Infante Cerda, con la música fuerte, porque iba probando todo y miro para atrás y estaba el mismo vehículo, me toca la bocina, me detengo y ahí pasó lo que pasó, me revisaron entero, me encontraron la mochila, encontraron mi plata, y yo no sabía que tenía una pistola y nunca he tenido una, nunca he disparado una, y hace 8 años que no

estoy preso y aquí caí preso e incluso tengo en mi celular los números de la persona de contacto pidiéndome la mochila, que era don Arturo, que se lo pasé a mi abogado y eso es todo lo que pasó y llevo dieciocho meses en este lugar.

Interrogado por la **Defensa**, indica que le dijeron que el que vendía autos era don Arturo, que era como un gitano, se encargaba de eso y cuando tuvo plata se contactó con él, y fue él (Arturo) el que le pasó los documentos y sólo vio que coincidían con la placa patente, pero no revisó más, y el vehículo estaba limpio, revisó la guantera y no tenía nada, hasta lo probó. El bolso estaba en el lado del copiloto, mientras que él portaba su banano y cuando probó el vehículo se cambiaron y ahí se quedó con la mochila, pero no era su intención quedarse con ella, porque el hombre sabía que trabaja en la Alameda.

A las consultas de la **Fiscalía** señala que nunca antes había declarado, dando esta versión. Compró la camioneta en \$3.600.000, pero no sabe otros datos de la persona, más que se llama Arturo, porque todo se haría en la Notaría al otro día y la camioneta la manejó sólo veinte minutos. Indica que es un Nissan, Qashqai, año 2017, 2018. Le llamó la atención, porque estaba bonito, tenía cuatro años, pero estaba en prenda, lo que no implica que sea robado, sino que no se puede vender, salvo por un papel notarial y lo quería comprar igual, para trabajar. Sólo revisó que coincidiera la patente con la revisión técnica, pero no se fijó que el documento no coincidía con el nombre de don Arturo, no hizo el QR, porque ahora sabe que el permiso de circulación está a nombre de otra persona de apellido Retamal, pero él mencionó que era de la hija. Vende de todo, calcetines para el invierno, cuellos, pantyes, no está insertado en la sociedad legalmente, pero paga su dividendo, que son \$120.000 y le paga a su hija que está en Argentina, estudiando Obstetricia, en La Plata y le manda \$200.000 y \$200.000 la mamá. Se levanta de madrugada, todos los días y gana \$80.000 pesos en total diarios, pero tiene una mujer ordenada que saca para invertir y guardar, a

veces \$30.000, \$50.000, cree que unos \$70.000 de ganancia, trabajando todos los días de la semana. Su señora se fue para su mamá y él se fue a ver el vehículo. Para comprar el vehículo tenía \$4.000.000. En el auto iba solo, se separó en la mañana, cerca de las 09:30 del señor, con quien se juntó en la Villa Portales como a las 09:00. Desde que salió hasta que se encontró con la policía pasaron 20 minutos y revisó el vehículo, se subió, lo probó, lo aceleró, le vio el aceite, pero nunca ha tenido licencia de conducir, porque era para trabajar, aunque sabe que igual se necesita, porque es una falta. Respecto de la mochila con el arma, era una pistola negra, 9 mm. Con don Arturo se iba a juntar al otro día a la hora que lo llamara, pero sí le entregó la plata, y lo conocía por intermedio de otras personas que le habían comprado vehículos. Un amigo que le había comprado otro vehículo le dio el contacto, y el amigo se llama Roberto, pero no sabe el apellido, porque son todos comerciantes.

QUINTO: *Convenciones probatorias.* Que conforme al auto de apertura los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 275 del Código Procesal Penal.

SEXTO: *Prueba.* Que, a fin de acreditar los hechos contenidos en la acusación fiscal y la participación del acusado en ellos, el Ministerio Público incorporó durante la audiencia de juicio oral la siguiente prueba:

1. **Prueba testimonial:**

1. Manuel Ignacio Riesco Villegas
2. Gonzalo Matías Alvarado Valenzuela
3. Krishna Salazar Vargas

2. **Otros medios de prueba**

1. Set fotográfico de 05 imágenes, que muestran el interior del vehículo placa patente única KTTC-33 y las especies halladas en su interior, confeccionado por la detective Krishna Salazar Vargas.
2. Set fotográfico con 06 imágenes, correspondientes al vehículo placa patente única KTTC-33, a las placas patentes falsificadas y a los

documentos del vehículo falsificados, confeccionado por la detective Krishna Salazar Vargas.

3. 06 fotografías del arma a fogueo, marca Bruni y de las municiones incautadas al acusado, que forman parte del informe pericial balístico N° 28/23.

4. 06 imágenes de los documentos falsificados hallados en poder del acusado, que forman parte del informe pericial documental N° 492/2022.

5. Copia de Pantalla del correo electrónico enviado por la secretaria del Departamento de Permisos de circulación de la Dirección del Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Macul dirigido a Bicrim Cerrillos, mediante el cual se certifica que la Placa Patente Única LLHG-31, no registra antecedentes de pago por concepto de Permisos de circulación.

3. Documental

1. Parte denuncia N° 3175, de fecha 15 de julio de 2022, que da cuenta del delito base de Robo del vehículo Placa Patente Única KTTC-33.

2. Informe de Encargo Vigente N° SEBV_202207_3792, del Departamento SEBV, de fecha 15 de Julio de 2022, correspondiente al robo del vehículo placa patente única KTTC-33.

3. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo placa patente KTTC-33.

4. Hoja de vida del conductor emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación correspondiente al acusado JORGE ANTONIO MUÑOZ MIRANDA.

5. Oficio N° 6442/964/2023, de la Dirección General de Movilización Nacional, Autoridad Fiscalizadora N° 28, de fecha 02 de marzo de 2023, donde se señala que el acusado Jorge Antonio Muñoz Miranda no registra inscripción de arma de fuego ni autorización de compra de municiones.

6. Pericial

1. Hugo Chamorro Carrasco
2. Pablo César Durán Moraga
3. Alejandra Arancibia Cerda

*A su turno, **la defensa no rindió prueba propia.***

SÉPTIMO: *Alegatos de Clausura y última palabra del acusado.* La **Fiscalía** entiende que los delitos de falsedad exceden el de receptación. Esto es, que si bien se considera que estos delitos pueden ser concebidos como necesarios para cometer el delito de receptación, aquí es diverso, ya que no es necesario circular con placas patentes falsas para la receptación. En cuanto al arma de fuego y las municiones, el acusado sí las tenía y por ello existen ilícitos separados, en definitiva se trata de un cúmulo de delitos. En relación a la participación, quedó acreditado que el acusado manejaba el auto con encargo por robo, que la documentación era falsa, igualmente que las placas patentes y sí tenía un arma, especificando que respecto del dolo estima que concurre, tanto por la prueba de cargo como por indicios. Refiere a las declaraciones de los policías, que la declaración del acusado no tiene antecedentes que la revistan de plausibilidad y es que si bien la prueba es de cargo de la Fiscalía, si se tiene una versión distinta debe contarse con elementos que la hagan verosímil. Señala que el acusado compró un vehículo en \$3.600.000 en circunstancias que la víctima la avalúa en \$19.000.000 y aun cuando ésta fuera optimista, lo cierto es que se trata de un Station wagon que al menos vale \$15.000.000; además no figuran limitaciones al dominio, se lo compró a un tal don Arturo, a quien sin conocerlo mayormente le pasa en efectivo \$3.600.000 y el hecho de no haber revisado nada, no es creíble y no percatarse siquiera que el permiso de circulación estaba a nombre de otra persona. Destaca que estos descargos nunca los había planteado antes, siendo que lleva más de un año privado de libertad y sin que durante todo este tiempo acompañare antecedentes. Por otro lado el dinero, los \$400.000 estaban en la misma mochila, igual que el banano,

siendo que la mochila era de don Arturo, pero no sabía que estaba dentro la pistola. En definitiva, mantiene su pretensión de condena.

La **Defensa**, por su lado, insiste en la absolución, reproduciendo la declaración del acusado. Indica que la víctima del delito base no declaró, pero sí reconoce que existe el elemento objetivo de la receptación, pero respecto del subjetivo, su defendido no tenía por qué hacer el trabajo de ver si el vehículo tenía el encargo por robo, y por una persona que no es delincuente, porque además los documentos falsos se los entregaron y no tenía cómo saber que los podía escanear o ver los tecnicismos de la placa patente. En caso de condena, igualmente, los documentos falsos son el medio para cometer la receptación y así subsumirse en él, lo mismo que respecto de las municiones en el porte de arma.

La **Fiscalía replica**, indicando que una persona media puede no percatarse de ciertas características, pero sí puede revisar el código o al menos ver que los documentos tengan el nombre de la persona que vende, que el bien tenga un valor razonable.

La **Defensa no replica**.

Concluidos los alegatos de clausura y ofrecida la palabra al acusado por el Juez Presidente de la Sala, manifestó que compró un vehículo en prenda.

OCTAVO: *Hechos que se tuvieron por acreditados:* Que el tribunal apreció la prueba rendida en el juicio con libertad, velando no contradecir la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, con lo cual se logró adquirir más allá de toda duda razonable, la convicción que:

“El día 02 de Agosto de 2022, a las 10:35 horas aproximadamente, en calle Padre Jaime Larraín Hurtado al llegar a calle Pío XII, en la comuna de Estación Central, el imputado JORGE ANTONIO MUÑOZ MIRANDA, fue sorprendido conduciendo el vehículo marca Nissan, modelo Qashqai, año 2018, color rojo magnético, el cual portaba la Placa Patente Única LLHG-31, a sabiendas que

esta era falsa, lo que se determinó a su control, ya que no poseía sellos holográficos ni signos estampados o impresos, la perfilación del escudo nacional era imprecisa, además de anomalías tipográficas en los caracteres de identificación. Asimismo, a la revisión de la documentación del vehículo asociado a la placa patente única LLHG-31, correspondiente a permiso de circulación de la Ilustre Municipalidad de Macul, certificado de inscripción, certificado de revisión técnica y seguro obligatorio, se logró determinar que eran falsas, toda vez que sus códigos QR no arrojaron coincidencia alguna, estableciéndose de esta manera que no habían sido otorgados, corroborándose además por el Departamento de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Macul que la Placa Patente Única LLHG-3, no registra pago de permiso de circulación en esa Ilustre Municipalidad. A la revisión de los números de motor y chasis del vehículo, se pudo determinar que su verdadera Placa Patente Única era la KTTC-33, presentando encargo vigente por Robo en Bienes Nacionales de Uso Público N° SEBV_202207_3792, de fecha 15 de Julio de 2022, según denuncia N° 3175, de la 44 Comisaría de Lo Prado, interpuesta por su dueña, la víctima JENNIFFER ELIZABETH SEPÚLVEDA PALMA. Al registro del interior del vehículo, bajo el asiento del copiloto el imputado JORGE ANTONIO MUÑOZ MIRANDA escondía una mochila en la que guardaba 400.000 mil pesos en dinero en efectivo y en ella también portaba una pistola a fogueo marca Bruni, modelo 93, calibre 9 mm. Knall, sin número de serie, la que se encuentra modificada en su cañón el cual fue horadado, no encontrándose obturado, además sus mecanismos internos y externos se encuentran funcionando de manera sincronizada según su diseño de fabricación y propósito, su alimentación es mediante un cargador tipo cajetilla doble columna, con capacidad para contener en su interior 11 cartuchos, encontrándose por tanto apta para ser utilizada como arma de fuego convencional. El cargador del arma contenía 04 cartuchos de fogueo de 9 mm. Knal, de diferentes marcas, los cuales presentan sus cápsulas iniciadoras indemnes, manteniendo una modificación en su estructura original de fábrica al presentar un trozo de metal de color gris a modo de

proyectil, encontrándose aptos para ser utilizados como munición convencional por armas de fogeo modificadas de igual diámetro, siendo compatible en uso con la pistola también encontrada, sin que el imputado mantuviera autorización para el porte o tenencia de armas de fuego”.

En efecto, el Tribunal contó con las declaraciones armónicas de los dos funcionarios policiales-Manuel Riesco Villegas y Gonzalo Alvarado Valenzuela- que practicaron la fiscalización el día 2 de agosto de 2022, quienes dieron cuenta, además, de las razones que motivaron aquélla y es que les llamó la atención que la placa patente del vehículo que manejaba el acusado (Nissan, modelo Qashqai) tuviera sellos holográficos que les parecieron extraños, por cuanto podían verse de todos lados, en circunstancias que ello no es así en los originales, se apreciaban en la misma más escudos que los reglamentarios y presentaba una tipografía llamativa, particularmente la letra L que no se condecía con las correspondientes a placas auténticas, por lo que decidieron inspeccionar. Es así como detuvieron el móvil y al pedir la documentación del mismo, el acusado presentó un permiso de circulación emanado de la I. Municipalidad de Macul que al revisar su código QR no arrojó información alguna como tampoco los derivó a una página web institucional que corroborara el hecho de haber obtenido en tal municipio el aludido permiso. Lo mismo aconteció con los otros documentos que portaba, consistentes en el seguro obligatorio, certificado de inscripción y certificado de revisión técnica, los que fueron revisados de la misma forma, específicamente por Alvarado Valenzuela, con el mismo resultado. Así las cosas, y habiendo determinado al menos una falsificación respecto de estos documentos, se procedió a trasladar a Muñoz a la unidad policial, lugar en que se revisó el vehículo, encontrando bajo el asiento del copiloto una mochila que en su interior tenía una pistola a fogeo marca Bruni, 9 mm, 4 cartuchos y el monto de \$400.000, por lo que se sumó al procedimiento la detención por porte ilegal de arma de fuego y municiones. Luego, y al revisar los números de motor y chasis, pudieron corroborar que a

ese vehículo le correspondía otra patente, la KTTC-33 y no la que portaba LLHG-31, y que una vez introducida la información en su base de datos pudieron saber que el vehículo tenía encargo por robo vigente, terminando de este modo el procedimiento, además, por el delito de receptación.

Efectivamente, el funcionario de la Policía de Investigaciones, Subinspector Manuel Riesco Villegas relató en estrados que *el señor Muñoz fue detenido el 2 de agosto de 2022 sobre las 10:30 de la mañana aproximadamente. Se encontraba junto al Inspector Ortega Oliver y el Subinspector Alvarado, circulando por calle Cinco de Abril, se dirigían al poniente y lograron visualizar un vehículo Nissan, marca Qashqai, color rojo, PPU LLHG-31, con una tipografía un poco extraña y los sellos holográficos se veían de todos los ángulos, lo que les pareció raro y por eso controlaron el vehículo. Descendió el acusado, no portaba nada en las vestimentas, pero al revisar el vehículo se percataron que el permiso de circulación supuestamente emanado de la Municipalidad de Macul, estaba falsificado, porque el código QR, al escanearlo, no arroja documento alguno, no eran fidedignos de la propia Municipalidad, no da al sitio web, lo que después se corroboró y primero entonces se tomó el procedimiento por la falsificación del documento y una vez en la unidad policial se registró más a fondo el vehículo, logrando encontrar bajo el asiento del copiloto una mochila azul que mantenía un arma a fuego, 9 mm, marca Bruni con 4 cartuchos de 9 mm de confección artesanal, \$400.000 al interior de la mochila, remitiéndose todo a la Fiscalía bajo cadena de custodia. Realizaron las coordinaciones para ver el estado en que se encontraba el vehículo y mediante el número de motor que no estaba alterado se determinó que la placa patente no correspondía a la portaba, sino a la KTTC-33, por lo que también se pudo corroborar que tenía encargo por robo y con todo estos antecedentes se detuvo a la persona, porque además se corroboró con la Municipalidad de Macul que el acusado nunca sacó documentación en esa municipalidad y luego por el perito supieron que el arma estaba apta para el disparo y la receptación.*

A su turno y prácticamente en los mismos términos declaró el Inspector de la misma policía Gonzalo Alvarado Valenzuela, por cuanto expresó que *el procedimiento es del 2 de agosto de 2022. Iban de vuelta a la unidad y cuando se trasladaban por Cicno de abril en Estación Central en dirección al poniente, vieron un vehículo a su costado izquierdo, Nissan, color rojo, que si bien mantenía sus dos placas patentes adosadas a la estructura, era muy artesanal, bien burda, carecía de sellos de seguridad, las letras se veían con plumón, bien artesanal, por lo que decidieron realizar un control de identidad para verificar las placas patentes y el vehículo dobla por calle Padre Jaime Larraín Hurtado y por eso hacen el seguimiento, encendieron los elementos sonoros y de luz para que se detuviera, se entrevistaron con la persona y vieron que la placa patente era artesanal, no original, por lo que se solicitó la documentación del móvil y al momento de ver los documentos del vehículo vio que la patente LLHG 31, al consultarla, pertenecía a un vehículo de las mismas características, pero al escanear el código QR no lo direccionaba a información pública y ello es porque son falsos, ya que manda a la Municipalidad o al lugar de la revisión técnica. Los documentos además estaban vencidos y el sujeto no tenía licencia de conducir. La Municipalidad era de Macul y buscó un número de esa municipalidad desde su teléfono celular, se identificó como funcionario de la PDI y a la señorita que le contestó le pidió ayuda para que le viera si ese vehículo tenía registro de permiso de circulación en esa municipalidad, le dio la placa patente y la señorita le dijo que no. Por eso y al ver el tema de las placas patentes, se procedió a su detención y fue trasladado a la unidad y el Inspector Ortega y el Subinspector Riesco revisaron el vehículo, confirmaron que las placas patentes no eran verdaderas y encontraron una mochila con un arma a fuego, 9 mm, marca Bruni, 4 cartuchos artesanales y \$400.000, llevando el armamento para su pericia y el perito señaló que estaba apta para el disparo y los cartuchos también. Con eso procedieron por el delito de infracción de armas. En la sección mecánica para ver si el número de motor y el chasis estaba adulterado, y el perito mecánico indicó que no lo estaban y según el sistema*

correspondía a la PPU KTTC 33, el que consultado en el sistema mantenía un encargo vigente por robo denunciado en la Comisaría de Lo Prado y se agregó el delito de receptación.

Como se aprecia, ambos deponentes refieren las mismas circunstancias y hallazgos del procedimiento, lo que a su vez es coincidente con el testimonio de la Subinspectora Krishna Salazar Vargas, quien fijó fotográficamente la evidencia a la que aludieron sus colegas, con lo que se establece un debido correlato entre lo depuesto por los testigos y lo que finalmente se fijó para efectos de registrar lo encontrado. Precisamente, fue la misma testigo Salazar quien explicó en juicio las fotos por ella misma tomadas, y que el Tribunal pudo observar, constatando que corresponde a aquello previamente relatado por Alvarado y Riesco.

Para efectos de orden se examinarán las probanzas por separado en lo concerniente a cada punto contenido en el libelo acusatorio. Al efecto, en lo relativo a la **documentación falsa**, primeramente conviene indicar que se le atribuye tal entidad al permiso de circulación aparentemente emitido por la I. Municipalidad de Macul, el certificado de inscripción del vehículo, el certificado de revisión técnica y seguro obligatorio. Pues bien, son los mismos agentes Alvarado y Riesco quienes se refirieron al permiso de circulación, precisando que Alvarado fue quien con su celular escaneó el código QR que el referido documento mantenía, sin que arrojara alguna información, como tampoco lo derivó a la página web del municipio, lo que constituyó un primer indicio de su falsedad. Atendida esta circunstancia, Alvarado se comunicó telefónicamente con dicha municipalidad, siendo atendido por una señorita, quien al consultársele al respecto le señaló que ese vehículo con esa placa patente no figuraba en sus registros de haber obtenido el permiso de circulación. Ello fue luego formalizado mediante el envío de parte de la Municipalidad de un correo electrónico en que se daba cuenta de la misma información. Efectivamente, se incorporó la copia de pantalla del aludido mail (Otros medios de Prueba N° 5) enviado por la Secretaria del

Departamento de permisos de circulación de la Dirección del Tránsito y Transporte Público de la I. Municipalidad de Macul dirigido a la BICRIM de Cerrillos, Patricia Rocha Palma, y que fue reconocido en audiencia por Alvarado, en el que se señala que la placa patente única LL HG-31 no registra antecedentes de pago por permiso de circulación en ese municipio. Tal información, emanada justamente del organismo público a cuyo nombre figuraba el señalado permiso tiene mérito ya de por sí para tener por asentado que el mismo no fue obtenido en aquél, pero se probó su falsedad con la declaración de la perito documental Alejandra Arancibia Cerda, quien expresó que el documento no es auténtico, ya que corresponde a una impresión digitalizada, impresión casera de tonel o láser a diferencia de los permisos válidamente emitidos que se fabrican en sistema Offset, lo que graficó al explicar la foto N° 3 del Set N° 4 de Otros medios de Prueba, donde se aprecia el fondo del permiso con bordes poco claros y poca definición, lo que contrasta con el papel genuino utilizado para este tipo de documentos y que demuestra con la foto N° 4 del mismo set en que se aprecia el detalle de la impresión Offset que fue la usada para el cotejo. Por su parte, con las fotos N°s 2 y 3 del Set N° 2 y explicadas por la Subinspectora Salazar, se logró apreciar que el referido permiso de circulación tenía precisamente un código QR, con lo que existe correlato con lo señalado por los policías en orden a haber escaneado el código QR que traía el permiso, reiterado por Salazar, sin que arrojava información de la Municipalidad, lo que, a su vez, es del todo coherente con lo declarado por la perito, y es que imposible era que el señalado código arrojava información, toda vez que no era auténtico y que, por lo demás, por tratarse la pericial de una prueba de corte científico, goza de virtud probatoria para tener ese hecho por asentado.

Igualmente prudente es detenerse en la observación que hace la Subinspectora Salazar al indicar que el permiso de circulación estaba a nombre de un tercero, José Abelino Pilar Retamal, por cuanto ello, y como se analizará luego, corresponde a otro indicio respecto del elemento subjetivo

de la receptación, destacando, desde ya, que al ser consultado el acusado por la Fiscalía sobre el particular, indicó no haberse dado cuenta de aquello y que el auto era al parecer de la hija de don Arturo.

Ahora bien, en lo concerniente a los otros documentos, cuales son el certificado de inscripción, el seguro obligatorio y el certificado de revisión técnica, cabe mencionar que el policía Alvarado fue quien, nuevamente con su celular, pretendió obtener más información sobre tal documentación escaneando los códigos QR, sin resultado, lo que se alzó como un primer indicio de falsedad, la que finalmente resulta debidamente acreditada con la pericia documental, por cuanto la misma especialista Arancibia Cerda al respecto explicó que si bien no tienen elementos que puedan ser analizados de su materialidad por no tener elementos de seguridad, sí presentan diferencias con los válidamente emitidos, particularmente el certificado de inscripción que tiene diferencias de tipografía y tamaño y lo mismo ocurre con el seguro obligatorio, lo que la llevó a determinar que eran falsos, y, particularmente respecto del certificado de homologación verificó que está confeccionado en un papel común, no en uno de seguridad y no impreso en Offset, por lo que no presentaba ninguna de las características que respalda a los genuinos, siendo de confección casera y por ende todos los documentos son falsos. Tales conclusiones las ilustra de mayor manera al referirse a las fotos del mismo set, indicando que en la foto N° 5 se aprecia que el tamaño del documento ni diseño de fuente no corresponde al que utiliza el Registro Civil, siendo, en definitiva fabricados digitalmente con distintas aplicaciones; y en la N° 6, específicamente respecto del certificado de homologación, señala que expuesto a luz ultravioleta se aprecia su fluorescencia, resplandeciente, en circunstancia que debiera verse opaco, con fibrillas verdes y azules, ya que ésa es la característica del papel de seguridad que se utiliza para este tipo de documentación, por lo que se trata de un documento de fabricación casera. De consiguiente, con esta prueba de corte científico, nuevamente se tiene por establecida la falsedad de estos documentos,

confirmando así los primeros indicios que motivaron a los agentes de policía a practicar la detención por esta causa. En este acápite importante es mencionar que si bien Alvarado fue quien se refirió a estos documentos, toda vez que Riesco dijo recordar únicamente lo relativo al permiso de circulación, lo cierto es que con la prueba pericial queda acreditada la falsedad de los mismos, por lo que aparece como irrelevante que en este punto en concreto Riesco sólo se refiriera al permiso ya señalado.

Por otro lado, se imputa también por el persecutor la **falsedad de las placas patentes**, que en lo concreto corresponde a la LLHG-31. En lo concerniente a este punto, cabe decir que fue particularmente este hecho el que motivó la fiscalización al acusado por parte de los policías, dado que les llamó la atención diversas características, tales como que los sellos holográficos podían visualizarse de distintas partes, en circunstancias que los genuinos sólo se aprecian desde ciertos lugares y no de todos, la tipografía usada y la cantidad de escudos, dado que las originales sólo tienen cuatro y las que portaba el acusado tenían cinco. Al respecto, se contó con la pericia documental que practicó la profesional Arancibia Cerda, quien manifestó que revisó las dos placas patentes-delantera y trasera-y ambas eran ejemplares falsos, por cuanto presentaban diferencias importante en cuanto a su materialidad principalmente, porque estaban elaboradas en aluminio común y no anodizado que son fabricadas por la Casa de Moneda que otorga opacidad por el reverso con el fin de proteger a esta especie de la corrosión, además presentaba que los escudos eran observables desde cualquier ángulo de observación, a diferencia de los genuinos que sólo se observan inclinando la patente entre 30 y 60 grados, asimismo carecían de dispositivos holográficos que se pueden ver con luz dirigida que tiene la sigla del Registro Civil e Identificación.

Su explicación la detalla con las fotos N°s 1 y 2 del set N° 4, donde se aprecian las aludidas placas patentes, destacando que se observa el aluminio brillante de fabricación común y no anodizado que es de acabado opaco que

le da otra resistencia, pensado para que tengan más durabilidad, lo que se aprecia en la parte posterior. Alude asimismo a los dispositivos holográficos que están en la parte delantera, que contiene la información alfa numérica que se ve con luz directa y que debiera tener el logo CRCI que no las tenía. En relación con ello, el Tribunal observó también las fotografías N°s 1 y 2 del Set N° 2 que explicó a su vez Salazar, donde aparece la placa patente irregular con una muestra de una placa patente auténtica, donde se observa también las diferencias explicadas por los testigos, lo que se enlaza con lo declarado por la perito, quien en definitiva concluyó la falsedad de las mismas.

Pues bien, con todos estos elementos de convicción queda acreditada la falsedad de los documentos ya detallados, como asimismo de las placas patentes, lo que al mismo tiempo se imponen como antecedentes bastantes para entender el procedimiento que los policías decidieron emprender.

En cuanto a la **receptación**, y en primer término, quedó probado con los dichos de los funcionarios que el acusado fue sorprendido mientras conducía el vehículo en cuestión, sin acompañantes, siendo luego periciado el móvil por el perito mecánico Pablo Durán Moraga, quien expresó al Tribunal que revisada la serie de motor y el chasis, no presentaban señales de manipulación ni adulteración, correspondiendo ese auto, conforme la información obtenida del Registro de Vehículos Motorizados, a la placa patente única KTTC 33. Asimismo, los policías Riesco y Alvarado al incorporar esa información a la base de datos se percataron que respecto de ese móvil existía un encargo vigente por robo. Al respecto, se incorporó como documental tal encargo (N° 2), correspondiente al “SEBV_202207_3792”, del Departamento SEBV de fecha 15 de Julio de 2022 referente al robo del vehículo placa patente única KTTC-33, lo que se vincula con el Parte denuncia N° 3175 (N° 1) fechado 15 de julio de 2022, que da cuenta del robo del mismo, especificando que la propietaria Jenniffer Elizabeth Sepúlveda Palma denunció el robo de su móvil Nissan, marca Qashqai, PPU KTTC 33, año 2018 ocurrido el 14 de julio de 2022, desde la vía pública. Al efecto, especificó que

siendo las 23:00 horas de ese día salió a pasear a su perro se percató que su vehículo aún estaba estacionado frente a su domicilio en calle Ernesto Pinto Lagarrigue N° 6027, Lo Prado, siendo advertida por su padre en horas de la mañana que el mismo ya no se encontraba, por lo que concurrió a la Comisaría.

A su vez, con el documento N° 3, consistente en el Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo placa patente KTTC-33, se constata que el propietario del mismo es la denunciante.

Pues bien, con todos estos antecedentes emanados de instituciones públicas y no controvertidos, se tiene por probado que el vehículo que manejaba el 2 de agosto de 2022 el acusado Muñoz Miranda había sido previamente sustraído a su dueña, lo que configura el delito base del de receptación y su elemento objetivo, destacando que además era él quien lo conducía. En lo tocante al elemento subjetivo, primero debe indicarse que el encausado al prestar declaración alegó no tener conocimiento acerca de ninguno de los hechos aquí ventilados, desconociendo entonces la falsedad de la documentación, que el permiso de circulación incluso estuviera a nombre de una persona diversa a quien le vendió el móvil, como asimismo la falsedad de las placas patentes, limitándose, según lo declararon los policías, a mostrarse sorprendido con cada uno de los hallazgos, incluyendo el del arma y las municiones, que se tratará a posteriori, pero respecto de lo cual nada dijo, salvo que el auto lo tenía desde hace poco, sin aportar otros antecedentes, como los que sí expresó en audiencia. Al respecto, estos sentenciadores estiman que existen también indicios suficientes para tener por convocado el elemento subjetivo en cuanto la norma lo indica “conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito del vehículo”, ya que toda la documentación relativa al mismo y las placas patentes eran falsas, no condiciendo siquiera el permiso de circulación con la persona que supuestamente le vendió el auto al acusado, “don Arturo”, siendo inverosímil que pretendiendo practicar los trámites legales en una Notaría al día siguiente se presentase con tales contradicciones y a regularizar una

situación con una persona de la cual sólo sabe su nombre de pila. Por el contrario, lo que tales antecedentes evidencian, es más bien un esfuerzo por parte de Muñoz Miranda de pasar desapercibido y eventualmente sortear un control con la exhibición de una documentación en apariencia verdadera, que pudiera finalmente permitirle pasar inadvertido durante la circulación por las calles y luego al enfrentar una fiscalización, eludiendo con ello responsabilidad, lo que no prosperó al toparse en la vía pública con funcionarios que, en cumplimiento de su deber, advirtieron extrañezas en las placas patentes y que después, al pedir la documentación, fueron diligentes en no sólo escanear los códigos QR, sino llamar-en lo concerniente al permiso de circulación-al municipio de Macul para verificar la información. Sin embargo, el resultado de la fiscalización no obsta que los esfuerzos del acusado hayan estado encaminados a evitar lo que precisamente ocurrió, y es que aparece como poco razonable que una persona circule por las calles con un auto cuyas placas patentes son falsas, toda la documentación relativa al mismo también lo sea, en que el permiso de circulación figura a nombre de un extraño, siendo también falso, sin saber nada de ello, y que el único dato que aporte de su origen sea la venta por un señor a quién sólo conoce como Arturo, que se lo recomendó un amigo de nombre Roberto, pero desconociendo del uno y del otro apellido u otro dato, mostrándose únicamente sorprendido ante tanta falsedad. A ello debe añadirse que pretendió el acusado justificar el bajo precio de un móvil de pocos años de antigüedad-lo que según sus palabras también lo sorprendió- con la circunstancia de que sobre el móvil pesaba una prenda, sin embargo ello no aparece ni en el certificado de inscripción del vehículo como en ningún otro antecedente incorporado en la causa, siendo así, otro dato aportado por el acusado sin sustento alguno, con lo cual deviene en un indicio más de que debía al menos conocer el origen ilícito del mismo.

Ciertamente, todo este panorama, y como se explicó, comprenden los indicios que a su vez constituyen al menos el conocimiento que el acusado

debía tener del origen espurio del móvil y que el que lo motiva a montar una apariencia de realidad, que de otro modo no se justifica. Por todo este contexto, el que el acusado no haya tratado de escapar de la policía no puede ser considerado como un elemento, como lo pretende la defensa, revelador de que Muñoz nada sabía de la falsedad de los documentos y de las placas patentes.

Por lo demás, con la hoja de vida del conductor del acusado evacuada por el Servicio de Registro Civil e Identificación queda probado, por emanar de institución pública y no cuestionado, que Muñoz Miranda no tiene licencia de conducir, sino por el contrario se constatan en el instrumentos diversas infracciones por conducir sin la respectiva licencia.

Ahora bien, estimándose concurrentes todos los elementos del tipo respecto de las falsedades que integran el libelo acusatorio, el Tribunal, en virtud del principio de subsunción, los estimará subsumidos en el de receptación, por cuanto, y como se desarrolló, constituyen los indicios para estructurar el elemento subjetivo, sin que puedan, entonces, considerarse y castigarse como delitos independientes, como lo solicita la Fiscalía. Aun cuando, estiman estos jueces que, en efecto, son varias las acciones que importan estos otros injustos, lo cierto es que ello influirá en la entidad de la pena a aplicar, como se indicará en lo pertinente.

Finalmente, en lo referente al **hallazgo del arma y las municiones** en poder del acusado, se tuvo por asentado con las declaraciones de los policías Riesco y Alvarado, quien al revisar el móvil encontraron debajo del asiento del copiloto una mochila con un arma a fuego en su interior, marca Bruni, 9 mm y cuatro municiones, los que fueron fijados fotográficamente por la testigo Salazar y que el Tribunal observó en las cinco fotos que integran el Set N° 1 de “Otros medios de prueba”, y por ella también explicadas, apreciando la aludida mochila dentro del vehículo, bajo el asiento del copiloto, con la pistola y las municiones, además de otras especies encontradas, como el

dinero, pudiendo observarse todas las especies incautadas en la foto N° 5 del set N° 2, a que aludió también la misma compareciente.

Por su parte, con la prueba pericial balística se tuvo por acreditado que en efecto se trataba de un arma de fuego y que las municiones también tenían la entidad de tales, por cuanto el perito Hugo Chamorro Carrasco manifestó que analizada el arma y las municiones que le fueron remitidas, concluyó que se trata de un arma a fogueo, marca Bruni, adaptada con el cañón horadado, lo que permite el paso de proyectiles convencionales y los cuatro cartuchos estaban adaptados, para tener la función de proyectiles balísticos, funcionando conforme su adaptación. Añadió que al hacer las pruebas de funcionamiento, el arma se disparaba y también se hizo las pruebas con los cartuchos, los que sirven de proyectiles, causando el daño que deben causar. Así las cosas, con esta pericia se tiene por establecido que se trata efectivamente de un arma de fuego, en concreto a fogueo adaptada, lo que quedó también debidamente graficado con las fotografías que el mismo profesional explicó (Set N° 3) que en sus seis fotos se logra ver la pistola a fogueo junto a su cargador por la cara izquierda y derecha, indicando el perito que su apariencia externa se corresponde con un arma fiel, convencional de fabricación brasileña, pudiendo apreciar la marca Bruni, modelo 92, calibre 99, procedencia italiana, la horadación del cañón para que deje libre el paso a los proyectiles, metales ingresados a los cartuchos y las cápsulas iniciadoras indemnes y los cartuchos, de los cuales se escogieron dos al azar para probarlas en el arma, lo que en efecto se ejecutó y salieron proyectados. Así las cosas y con esta prueba, por lo demás no discutida, queda asentado que el arma encontrada se comprende en la letra e) del artículo 3° de la Ley de Control de Armas.

A su turno, con el Oficio N° 6442/964/2023 (N° 5) de la Dirección General de Movilización Nacional, Autoridad Fiscalizadora N° 28, de 2 de marzo de 2023, queda asentado que el acusado Muñoz Miranda no registra inscripción de arma de fuego ni autorización de compra de municiones, ello,

por tratarse de documento emanado por la autoridad pública con competencia en la materia.

Ante tal hallazgo, el acusado se limitó a señalar al Tribunal que ni el arma ni las municiones eran suyas, sino de don Arturo, quien olvidó la mochila en el vehículo después que probaron juntos el auto, limitándose, nuevamente, según los policías, a mostrarse sorprendido cuando la encontraron. Sin embargo, lo cierto, es que el acusado iba solo en el vehículo, de manera que no puede atribuirse su porte a algún acompañante y aun cuando refirió en su declaración que le avisó a don Arturo que la mochila estaba en el auto, para devolvérsela, al Tribunal ello no le consta. Por otro lado, no resulta trivial que el dinero (\$400.000) que el mismo acusado reconoce como suyo, haya sido encontrado dentro de la misma mochila donde estaba el arma y las municiones, por cuanto aparece como, al menos peculiar, que el acusado haya metido esa suma en una mochila que no era suya o que al hacerlo ni siquiera se percatara de la presencia de un arma y que luego se mostrara sorprendido por su hallazgo.

En atención a ello es que el arma fue encontrada en poder del acusado, por quedar así probado en base a los antecedentes que sí constan en la causa.

Pero, al igual que en el caso anterior, al tratarse de municiones aptas para ser percutadas por la misma arma que Muñoz Miranda portaba, y en virtud del principio de subsunción, se tendrá tal injusto en concreto subsumido en el de porte de arma, sin perjuicio de la implicancia que tenga en la determinación de la pena, como se explicará en el ítem respectivo.

En lo concerniente a la **participación**, las mismas probanzas ya analizadas han resultado suficientes para establecer que fue Muñoz Miranda quien se encontraba a bordo del móvil robado, con toda la documentación y placas patentes falsas, y es quien portaba el arma de fuego, todo lo cual fue efectuado en el mismo procedimiento del día 2 de agosto de 2022, siendo identificado por los dos policías como Jorge Antonio Muñoz Miranda. A ello

se añade la circunstancia de que al empezar su declaración el Subinspector Riesco señaló que declara por el procedimiento del señor Muñoz, a quien indica en estrados de manera espontánea, para luego precisar, consultado de ese modo por el señor Fiscal, que efectivamente lo reconoce, identificándolo en audiencia.

En consecuencia, la prueba del ente persecutor ha sido bastante para derribar la presunción de inocencia que ampara al acusado y en consecuencia arribar a una sentencia condenatoria.

NOVENO: *Calificación jurídica y grado de desarrollo.* La descripción de los hechos que se ha efectuado precedentemente, se enmarcan en el delito tipificado en el artículo 456 bis A del Código Penal, esto es, de receptación de vehículo motorizado, por cuanto Muñoz Miranda se encontraba conduciendo el auto Nissan, modelo Qashqai, cuya placa patente única genuina corresponde a la KTTC-33, de propiedad de la señora Sepúlveda Palma, móvil que había sido robado el 15 de julio de 2022, lo que constituye su origen ilegal, sabiendo o no pudiendo menos que saber de dicho origen espurio, como ya se ha latamente desarrollado.

Asimismo, se constituye también el delito de porte ilegal de arma de fuego del artículo 14 en relación con el 3 letra d) de la ley N° 17.798 de Control de Armas, por cuanto el referido armamento fue encontrado al interior de la mochila hallada dentro del vehículo que conducía el acusado, lo que constituye su porte.

Asimismo, ambos ilícitos se encuentran en grado de desarrollo **consumados**, dado que el agente tenía a cualquier título un vehículo robado y portaba el arma de fuego, con lo que concreta los verbos rectores respecto de cada injusto, agotando así el íter críminis, sin que se requieran otras etapas para su ejecución total.

DÉCIMO: *Participación.* En mérito de los antecedentes, elementos de convicción y valoración de los mismos sobre los que se ha reflexionado en el considerando Octavo, y a objeto de evitar reiteraciones innecesarias, se dirá

únicamente que el acusado fue detenido por personal policial el mismo día de los hechos, conduciendo el móvil con placas patentes falsas y la documentación relativa al mismo igualmente falsa, portando, asimismo, un arma de fuego, siendo corroborada su identidad, la que pudo ser dada por los policías.

En consecuencia, al acusado le ha cabido participación en calidad de **autor** del numeral 1° del artículo 15 del Código Penal en ambos hechos punibles, por cuanto es quien ejecuta de manera directa e inmediata la acciones punibles a que ha hecho referencia.

DÉCIMO PRIMERO: *Decisión del tribunal.* Que este tribunal, por unanimidad de sus integrantes, luego de apreciar los elementos de cargo ya referidos, como se adelantó en el veredicto, decidió **condenar a Jorge Antonio Muñoz Miranda**, como autor del delito de receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal y por el delito de porte ilegal de arma de fuego, tipificado y castigado en el artículo 3 en relación con el 14 de la Ley N° 17.798, cometidos el 2 de agosto de 2022 en la comuna de Estación Central.

DÉCIMO SEGUNDO: *Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal.* La Fiscalía incorpora el extracto de filiación y se anticipa a una posible atenuante del artículo 11 N° 9, por cuanto si bien declaró, derecho que tiene, no aportó antecedentes aclaratorios, sino que pretendió exculparse y pide 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 UTM, dado que aunque el Tribunal no compartió su postura, de todos modos el disvalor de la conducta es mayor atendidos los documentos falsos y las placas patentes igualmente falsas. En el mismo argumento apoya su petición de 5 años para el porte, ya que las municiones podían ser percutidas por esa misma arma y ello también merece mayor reproche. El cumplimiento debe ser efectivo.

La **defensa**, a su turno, solicita la atenuante del numeral 9°, por cuanto reconoce la compra y posesión del vehículo, explicó la dinámica y dio razón de todo cuanto ocurrió y así, no existiendo agravantes, en ambos delitos, el

mínimo, que son 3 años y un día para cada delito. Pide reiteración del artículo 351, inciso segundo, y subir en un grado o aplicar el artículo 74 y separarlas.

La **Fiscalía** estima que no es aplicable el artículo 351 por ser delitos de distinta especie.

El **Tribunal** rechaza la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código del ramo, por cuanto si bien el acusado renunció a su derecho a guardar silencio y decidió declarar, ello por sí solo no justifica la minorante, dado que ésta requiere que importe colaborar sustancialmente a esclarecer los hechos, lo que no se apreció en el caso desde que Muñoz introdujo una serie de datos que sin respaldo alguno ni correlato con las probanzas, únicamente obligó al Tribunal a hacerse cargo de los motivos por los cuales sus dichos no tenían sustento. Por su parte, aun cuando se reconozca también como derecho el levantar una tesis defensiva diversa a la sostenida por el persecutor, no puede estimarse que ello constituya una colaboración para aclarar los hechos, considerando que lejos de lograrlo, desvió la atención a sus puntos levantados y ello menos puede estimarse sustancial.

DÉCIMO TERCERO: *Determinación de la pena y modo de cumplimiento.*

En cuanto al delito de receptación: de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 456 bis A del Código Penal, el delito de receptación de vehículo motorizado se encuentra castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales. En los hechos, el ilícito se encuentra en grado de desarrollo consumado, en el que le ha cabido al imputado participación en calidad de autor, sin que concurran atenuantes ni agravantes, por lo que el Tribunal puede recorrer la pena en toda su extensión. Al respecto y considerando que no obstante se consideraron los ilícitos referentes a las falsedades como subsumidos en el de receptación, estiman estos jueces que deben ser estimados en este acápite para determinar la cuantía de la pena y ciertamente ello importa, como lo sostiene la Fiscalía, un disvalor mayor en su comportamiento, toda

vez que el sentenciado emprendió un esfuerzo mayor para asegurar su impunidad al circular con todos estos documentos falsos, además de las placas patentes falsas, por lo que se impondrá una pena mayor que el mínimo, según se dirá en lo resolutivo.

En lo relativo a la multa, y teniendo presente que el acusado se ha encontrado privado de libertad por esta causa por larga data, y el cumplimiento de la pena que se impondrá será efectivo, se puede desprender una situación económica precaria, por lo que se optará por aplicar una pena en Unidades Tributarias Mensuales y fijará la mínima establecida por la ley, de cinco (5) UTM, que se pagará por parcialidades, conforme se expresará en lo resolutivo del fallo, de acuerdo lo faculta el artículo 70 del Código Penal.

Respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley N° 17.798 de Control de armas, aquél se encuentra sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Considerando que el condenado lo fue en calidad de autor de uno consumado, sin que concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, con lo que puede recorrerse la pena en toda su extensión, no se aplicará el mínimo siguiendo la misma línea de pensamiento que para el injusto que antecede, dado que se estima un disvalor mayor al tener municiones adaptadas que permitían su percusión en la misma arma que portaba, la que si bien fue subsumida en ese delito, no puede obviarse tal circunstancia como un elemento para decidir la cuantía de la pena.

Respecto a la **forma de cumplimiento**, y atendido que no se cumplen los requisitos de la Ley N° 18.216, será efectivo.

Por su parte, se desestima la petición de la defensa de aplicar el artículo 351 del Código Procesal Penal por no darse los presupuestos legales ni aun en el inciso segundo, en que en caso alguno se trata de delito de la misma especie ni existe hipótesis de concurso sobre el cual se pudiese al menos debatir.

DÉCIMO CUARTO: *Costas.* Que, en relación a la decisión condenatoria, se le eximirá igualmente al acusado del pago de las costas, por encontrarse privado de libertad, conforme lo disponen los artículos 45 y 47 del Código Procesal Penal y 593 del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, y en lo tocante a la decisión absolutoria contenida en este fallo, se eximirá al Ministerio Público de dicha carga pecuniaria, por estimarse que tuvo motivo plausible para deducir la acción penal respecto a los ilícitos en cuestión.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 7, 15 N° 1, 29, 70, 456 bis A, del Código Penal; 45, 47, 83, 85, 113, 261, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 349 del Código Procesal Penal, artículo 14, 3 letra e) de la Ley N° 17.798, y artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales **SE DECLARA:**

I. Que se **condena a Jorge Antonio Muñoz Miranda**, ya individualizado, a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, y al pago de una multa de cinco (5) unidades tributarias mensuales (UTM), más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de receptación de vehículo motorizado, previsto y castigado en el artículo 456 bis A del Código Penal, perpetrado el 2 de agosto de 2022 en la comuna de Estación Central.

II.- Que se **condena a Jorge Antonio Muñoz Miranda**, ya individualizado, a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 14 en relación con la letra d) del artículo 3 de la Ley N° 17.798, perpetrado el 2 de agosto de 2022 en la comuna de Estación Central.

III.- Que, en atención a que no se cumplen los requisitos de la Ley N° 18.216 el **cumplimiento de las penas impuestas será efectivo.**

Se consideran como abonos **527 días** conforme se consigna en el certificado suscrito el nueve de enero del corriente.

IV.- Que, para el pago de la multa impuesta en el número I, se concede al sentenciado, cinco parcialidades de una Unidad Tributaria Mensual cada una. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa impuesta se aplicará, en lo que fuere procedente, lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal.

V.- Que, **se absuelve a Jorge Antonio Muñoz Miranda** de los otros cargos formulados por la Fiscalía.

VI.- Que de acuerdo a lo señalado en el motivo Décimo Cuarto de este fallo, se exime al sentenciado y al Ministerio Público del pago de las costas.

VII.- Que se decreta el comiso de las especies incautadas.

VIII.- Una vez ejecutoriada la sentencia, remítanse los antecedentes necesarios al Juzgado de Garantía de Santiago que corresponda para su cumplimiento y ejecución.

Sentencia redactada por la Magistrado doña Claudia Morgado Moscoso.

Devuélvase la prueba incorporada a los intervinientes en la oportunidad procesal respectiva.

Se deja constancia que el Magistrado Aravena no firma por encontrarse con licencia médica.

Regístrese, comuníquese y archívese.

RUC : 2200746927-k

RIT : 362-2023.

Pronunciado por la Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, presidida por don Pedro Aravena Bouyer y conformada por don

Cristian Fuentealba Zamora y Claudia Morgado Moscoso, todos jueces titulares de este Tribunal.